

LA ESTRATEGIA EUROMEDITERRÁNEA DE ASOCIACIÓN Y LA PRÓXIMA GRAN AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA: LOS ACUERDOS DE AMPLIACIÓN DE TÚNEZ Y JORDANIA

JESÚS BORES LAZO*

I. INTRODUCCIÓN

Con la intención de incluir en el segundo número del Anuario de Derecho Europeo de la Universidad de Sevilla una pequeña contribución sobre los Acuerdos de Asociación Euromediterráneos, hemos realizado este primer acercamiento a uno de los asuntos que posiblemente será prioritario en Europa en los próximos años. En la actualidad el objetivo se limita a la creación de una zona de libre cambio en el año 2010, pero la amplitud de los acuerdos y las prioridades geopolíticas invitan a pensar que el proceso de Barcelona no es sino el inicio de una nueva etapa que será esencial en el proceso de construcción europea.

Recientemente, la ratificación irlandesa del Tratado de Niza en la esperada votación del sábado 19 de octubre, inmediatamente posterior a la confirmación institucional¹ que abre el camino hacia la ampliación europea con la inclusión de diez de los Estados Candidatos (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, y la República Checa), reaviva una vez más el debate sobre el proceso de construcción europea. Sin duda, los cambios originados en la entonces *Europa de los doce*, desde la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, con la

* Jesús Bores Lazo es abogado, colaborador en la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de Sevilla y trabaja actualmente con la Comisión Europea en el desarrollo de los Acuerdos de Asociación de la Unión Europea con Jordania y Túnez.

1. Nos referimos aquí a las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Europea de los Informes Periódicos y del Documento Estratégico del 9 de octubre de 2002, que serían confirmados –una vez superado el obstáculo irlandés– por el Consejo Europeo de Bruselas de 24 y 25 de octubre. En sus conclusiones el Consejo Europeo señala que «*el proceso histórico iniciado en Copenhague en 1993 con el fin de superar las divisiones en nuestro continente está a punto de dar sus frutos. Si hoy estamos a las puertas de la mayor ampliación de la Unión de la Historia es gracias a la visión y los esfuerzos de los Estados Candidatos y los Estados Miembros*» para continuar con un claro respaldo al trabajo de la Comisión.

entrada en vigor de tres nuevos Tratados y de 13 Estados miembros², han provocado profundas modificaciones de carácter político, cultural y económico en la dinámica idea de Europa. La reforma institucional y el escepticismo del ciudadano no son sino parte del proceso de aprendizaje y de readaptación necesarios para seguir avanzando en este proceso de convivencia que además de haber mantenido la deseada paz en el viejo continente, ha extendido notablemente sus objetivos para poder establecer un verdadero espacio de prosperidad económica, libertad, seguridad y justicia.

Conscientes del debate que esta ampliación suscita, pero adelantándonos incluso a sus conclusiones y planteando una posible nueva ampliación hacia los Estados mediterráneos, recogemos a continuación algunas reflexiones sobre la materia a la luz de los acuerdos de asociación euromediterráneos existentes. Un primer acercamiento a la viabilidad político-jurídica de incorporar en el proyecto europeo a los vecinos de las otras riberas del Mediterráneo considerando la «*experiencia del este*»³ puede ser un elemento más a tener en cuenta en los próximos años.

II. EL INTERÉS DEL MEDITERRÁNEO PARA EUROPA: LA ESTRATEGIA COMÚN PARA EL MEDITERRÁNEO

Desde el establecimiento de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero en 1951 hasta la primera incorporación de nuevos Estados al proyecto comunitario, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretaña, fueron necesarios más de dos décadas; en los años ochenta, con la incorporación de Grecia primero, y de España y Portugal después, la presencia mediterránea otorgaba una nueva dimensión hasta entonces inexistente. A pesar de la permanencia de las doce estrellas en la bandera que simboliza la concreción de las ideas de *mercader de Cognac*, Jean Monnet, ese número fue superado con la incorporación de Austria y dos de los Estados nórdicos, Finlandia y Suecia. Los escépticos amantes de las estadísticas, y las valoraciones cuantitativas, resumen los cincuenta últimos años de comunidades europeas considerando las ampliaciones paulatinas y equilibradas a razón de tres Estados por década. Ahora, los temores de esta nueva ampliación, se resumen en unas cifras para algunos alarmantes: con la nueva ampliación la Unión Europea ocupará un tercio más de territorio y población⁴ pero su producto interior bruto total apenas alcanza el 5% por ciento del actual. A ello habría que añadir muchas otras dificultades como la conocida cuestión idiomática, la corrupción institucional, la congelación presupuestaria o la inmigración, entre otras, que provocan temores diversos. Sin embargo los más optimistas consideran que en los próximos años seremos testigos de las ventajas que la ampliación ofrece⁵ y las dificultades se verán compensadas por los logros de lo que se ha definido como una necesidad histórica.

2. Hay que añadir a los que ahora se incorporan aquellos que lo hicieron en 1994, es decir, Austria, Finlandia y Suecia, así como la compleja reunificación alemana que también ha contribuido a engrandecer las dimensiones de la Unión Europea.

3. El concepto de ampliación al este se ha venido utilizando de forma generalizada pero en esta nueva ampliación se incorporan también Estados del Mediterráneo como Malta o Chipre, que son de especial interés para nosotros por las posibles consecuencias futuras de su incorporación a las Comunidades Europeas.

4. Sin contar Turquía, alcanzará los 480 millones de habitantes.

5. Desde el punto de vista económico poder destacar el crecimiento de las exportaciones europeas a los países MEDA (365.000 Meur en 1990; 506.000 Meur en 1995 y 866.000 Meur en 2000, incrementándose

No obstante, a pesar de las dificultades y una vez aclarado el proceso tendente a la reunificación europea, los grandes estadistas europeos —para los que la seguridad se ha convertido quizás en el elemento esencial para la estabilidad y el desarrollo económico tras los acontecimientos del 11 de septiembre— vuelven sus ojos y sus políticas al *Mare Nostrum*. La cuna de las civilizaciones occidental y la ribera sur y oriental del Mediterráneo son ahora el nuevo reto que Europa debe afrontar.

La finalidad de la política comunitaria o de la «estrategia común para el Mediterráneo» ha superado en la actualidad las concepciones iniciales tendentes a la mera creación de una zona de libre-cambio en el año 2010, incluyendo el desarrollo equilibrado de las estructuras políticas, sociales y económicas de nuestros vecinos del sur. El Consejo Europeo celebrado en Lisboa en junio de 1992⁶ confirmó la voluntad política de acelerar el desarrollo socioeconómico en el Mediterráneo, de mejorar las condiciones de vida reduciendo las diferencias norte-sur y de fomentar la cooperación y la integración regional. Se establecen así las bases para facilitar el acercamiento a través del diálogo político, social y económico, y se pone de manifiesto la intención de llevar a cabo un conjunto de acuerdos de asociación y la voluntad de reforzar la cooperación de la sociedad civil de ambas riberas del Mediterráneo.

Pero fue en la Conferencia de Barcelona, en noviembre de 1995, cuando Túnez, Jordania y diez Estados⁷ del área meridional y oriental del Mediterráneo adoptaron con los quince Estados miembros de la Unión Europea la Declaración del Mediterráneo. Extendiendo el acuerdo a tres ámbitos que desde entonces han constituido los pilares de la colaboración euromediterránea en lo que se ha venido a llamar el *Proceso de Barcelona*, la declaración⁸ engloba: una asociación que afecta tanto al plano político como al de seguridad tendente a la creación de un área de paz y de estabilidad; una asociación económica y financiera con la intención de crear una zona de prosperidad compartida, especialmente mediante la introducción progresiva del libre-cambio; y una asociación social, cultural y humana tendente a intensificar el acercamiento de las sociedades civiles.

Indudablemente, el año 1995 marcó un antes y un después en las relaciones euromediterráneas con la puesta en marcha del proceso de Barcelona en el que el objetivo esencial es el establecimiento de una zona de estabilidad económica y prosperidad compartidas por ambas riberas del Mediterráneo. Sustituyendo los antiguos acuerdos de asociación de mediados de los años setenta en los que se acordaban una serie de preferencias comerciales sin contrapartida para los países beneficiarios, el nuevo marco de asociación manifiesta una clara voluntad y necesidad política de

un 137% en diez años); que debe acercarse todavía más al crecimiento de casi el 500 % en los trece países candidatos; Cifras facilitadas por Eurostat para la conferencia de Doha en noviembre de 2001.

6. Objetivos que serían posteriormente desarrollados en los Consejos Europeos de Essen en Diciembre de 1994 y Cannes en Junio de 1995.

7. Argelia, la Autoridad Palestina, Chipre, Egipto, Israel, Líbano, Malta, Marruecos, Siria, y Turquía.

8. La Declaración de Barcelona de 28 de noviembre de 1995 surgió en un momento clave para España en el que el Consejo estaba representado por su Presidente, Javier Solana; y la Comisión por su Vicepresidente, Manuel Marín. Acompañada de un ambicioso plan de trabajo, su concreción se ha ido realizando paulatinamente a través de los acuerdos de asociación y actualmente sirve de marco esencial para seguir avanzando en el acercamiento de los Estados euromediterráneos con la confirmación de la ampliación al este.

abordar conjuntamente problemas comunes. En este sentido, los acuerdos euromediterráneos de asociación¹⁰ constituyen uno de los elementos esenciales del Proceso de Barcelona.

De hecho, los acuerdos de asociación, de carácter globalizador, no se limitan exclusivamente a compromisos de cooperación o meramente de carácter económico sino que van mucho más allá incluyendo otros de naturaleza política, social y cultural. Incluso fomentan abiertamente la integración regional contribuyendo así a la consolidación de fuertes vínculos entre los países de las riberas sur y oriental del Mediterráneo¹¹.

III. LOS ACUERDOS DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UE Y SUS ESTADOS MIEMBROS Y LOS ESTADOS MEDITERRÁNEOS DE OTRO

Los acuerdos de asociación se encuadran dentro de una nueva generación de acuerdos regionales de carácter comercial de nueva generación que no sólo regulan en detalle los aspectos relativos a la importación, exportación y procedimientos comerciales de cruce de fronteras, sino que también recogen un diálogo político, económico y social de carácter permanente. De hecho, además de complementar las disposiciones existentes en otras organizaciones internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, estos acuerdos van más allá del establecimiento de disposiciones para facilitar el comercio euromediterráneo. Concluidos por un período indeterminado, pero con el objetivo de un mercado común para el 2010, estos acuerdos permiten crear las bases para una asociación estable fundamentada en la reciprocidad y el desarrollo conjunto. Si bien los acuerdos existentes entre sí muestran una estructura y contenidos similares, sus disposiciones rigen de forma diferenciada relaciones de carácter bilateral entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros con cada uno de los socios mediterráneos.

En lo que se refiere a la base jurídica de las Decisiones de la Comisión y del Consejo en la que se fundamentan los acuerdos de asociación¹², y en el marco de la competencia externa de las Comunidades para contraer este tipo de compromisos con

9. Desde el lanzamiento del Proceso de Barcelona, se han superado diversas fases en las que las instituciones comunitarias se han mostrado especialmente partidarias de su aceleración. Destaca especialmente la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeos de 6 de septiembre de 2000, COM(2000) 497 final, para preparar la cuarta reunión de Ministros de Asuntos Exteriores Euromediterráneos «un nuevo impulso para el proceso de Barcelona».

10. Es necesario recoger aquí, para evitar confusiones, que ni Malta, ni Chipre ni Turquía han firmado acuerdos de Asociación en el marco del Proceso de Barcelona, como veremos más adelante.

11. Es necesario tener en cuenta que prácticamente el 50% de importaciones y exportaciones de los países Mediterráneos tienen su origen o destino en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. En este sentido es de gran interés el análisis estadístico preparado por Eurostat para la preparación en Toledo del encuentro de Ministros «euromediterráneos» de Comercio (Stat/02/32 de 15 de marzo).

12. Así, en los dos casos que aquí trataremos con especial atención, las decisiones de 26 de enero de 1998 (DOCE L 97 de 30 de marzo de 1998) y de 26 de marzo de 2002 (DOCE L 129 de 15 de mayo de 2002) relativas a la conclusión del acuerdo euromediterráneo estableciendo una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, de una parte y, respectivamente, la República de Túnez y el Reino Hachemita de Jordania de otra.

terceros Estados debemos hacer breves referencias a los entonces artículos 238 y 228 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en el supuesto de Túnez; ahora para Jordania Art. 310 y 300 con las modificaciones numéricas incorporadas por el Tratado de Ámsterdam¹³. Como es sabido, además de los amplios poderes expresamente conferidos a la Comunidad para concluir acuerdos tanto con otras organizaciones internacionales como con los propios Estados, existe una amplia jurisprudencia del Tribunal de Justicia que justifican este tipo de acciones cuando sea necesario para alcanzar algunos de los objetivos establecidos en el Tratado¹⁴. En ellos la competencia el Consejo debe actuar por unanimidad¹⁵ y consultar previamente al Parlamento Europeo, todo ello sin mencionar además la necesaria ratificación de estos acuerdos en el plano interno lo que en ocasiones ha provocado una entrada en vigor bastante posterior a la firma de los acuerdos¹⁶.

Considerando las relaciones comerciales existentes, los Acuerdos de Asociación suponen una apertura progresiva de las economías de los Estados asociados tendente a una mayor liberalización en los sectores agrícolas y pesquero por un lado y a un absoluto desmantelamiento arancelario progresivo durante un período de doce años en lo referente a los productos industriales. Así, la oportunidad de crear una zona de integración económica en el Mediterráneo depende de el adecuado desarrollo y evaluación del marco jurídico de asociación establecido para ello.

Al margen del carácter específico de cada uno de los Acuerdos existentes, el proceso de Barcelona tiene un carácter globalizador que incluye el conjunto de las relaciones euromediterráneas. Si bien es cierto que las relaciones bilaterales preexistentes entre algunos de los Estados miembros de la Unión Europea y de los de las otras riberas del Mediterráneo han adquirido una especial importancia en el proceso de elaboración de los acuerdos, no es menos cierto que la estrategia es de conjunto y por tanto su finalidad radica en el establecimiento de una zona de estabilidad y desarrollo económico y social.

La importancia de los acuerdos de asociación euromediterráneos radica en su potencial de futuro, abriendo una puerta a una nueva e importante ampliación del proyecto de construcción europea –para algunos todavía impensable como lo era para muchos hace unos años la ampliación al este–. Sin embargo, quince años después de la caída del muro el noviembre de 1989 afrontamos el reto de la incorporación de diez Estados. Además, si bien por su importancia se ha denominado conjuntamente esta

13. No entramos aquí en el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en el que se establece la posibilidad de contraer este tipo de acuerdos.

14. En este sentido, la consolidada doctrina conocida como «efecto AETR», especialmente aplicada para los ámbitos económicos, se origina en la sentencia del TJCE de 31 de marzo de 1971, *Comisión c. Consejo*, AETR, Asunto 22/70, en la que se dice que «cada vez que el Derecho comunitario ha establecido, a favor de las instituciones de la Comunidad, competencia en el plano interno con miras a realizar un objetivo determinado, la Comunidad está investida de la competencia para obligarse internacionalmente en la medida necesaria para la realización de ese objetivo, incluso en ausencia de una disposición expresa a este respecto».

15. Art 300, p. 2. última frase; y art. 300 p.3.

16. El Acuerdo con la República de Túnez fue firmado el 17 de julio de 1995 entrando en vigor el 1 de marzo de 1998 y el Acuerdo con el Reino Hachemita de Jordania fue firmado el 24 de noviembre de 1997 entrando en vigor el 1 de mayo de 2002.

ampliación como la de Europa central y oriental, no debemos olvidar que en ella ya se incorporan dos Estados mediterráneos: Malta y Chipre. Turquía debe esperar pero posiblemente lidere la nueva etapa a la que aquí nos referimos.

Considerando que la Comunidad Europea es el primer socio comercial de los Estados firmantes y el objetivo de establecer una zona de libre cambio, así como los demás ámbitos cubiertos por los acuerdos, estos constituyen un instrumento esencial para la consolidación de un nuevo período de ampliación. Por tanto los acuerdos constituyen un marco jurídico para las relaciones bilaterales de las Comunidades Europeas con cada uno de los Estados signatarios que debe ser debidamente desarrollado para hacer efectivos sus objetivos más allá de los compromisos inicialmente establecidos.

IV. LOS ACUERDOS EUROMEDITERRÁNEOS EN VIGOR CON JORDANIA Y TÚNEZ Y SU PUESTA EN PRÁCTICA

Por las diferencias existentes entre estos países tanto de carácter político, como social y económico, pueden ser una referencia útil para comprender los mecanismos previstos para el desarrollo de los acuerdos euromediterráneos los contraídos con un Estado del Magreb y otro del Mashrek. Si bien el acuerdo con la República de Túnez fue el primero de los acuerdos firmados, y es este uno de los países cuyas cifras comerciales muestran unas elevadas relaciones comerciales con los Estados de la Comunidad Europea, el caso de Jordania, tanto por su situación geográfica como por sus características socioeconómicas puede mostrar el desarrollo diferenciado de una estrategia común.

Como denominador común encontramos cuatro pilares esenciales sobre los que se fundamentan todos los acuerdos, y en especial estos dos:

El primero de ellos establece unas exigencias esenciales para fortalecer el diálogo político fundamentado en el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos para el desarrollo de una relación de carácter estable que facilite la comprensión mutua y la tolerancia entre culturas. Este diálogo se desarrolla a varios niveles: ministerial (Consejo de Asociación), de altos funcionarios, diplomático, y parlamentario, así como de cualquier otra vía que contribuya a la intensificación y a la eficacia del diálogo político.

La organización del proceso de progresiva liberalización de los intercambios comerciales, bajo el título de «*libre circulación de mercancías*» constituye el segundo de estos pilares, en el que por razones de sistematización práctica se incluyen también las disposiciones que tienen por objeto la regulación del derecho de establecimiento, a la libre prestación de servicios y a lo que suele denominarse pagos, capitales, competencia y otras disposiciones de carácter económico. En lo que se refiere a los productos agrícolas, una de las áreas más sensibles social y económicamente en el proceso de liberalización, no se prevé en los acuerdos un desmantelamiento aduanero absoluto¹⁷. De hecho, sigue vigente el sistema de concesiones recíprocas tradicio-

17. El Acuerdo de Asociación con Túnez, en su artículo 16 se refiere a ella como una «mayor liberalización - une plus grande libéralisation», y lo mismo ocurre con el artículo 15 del Acuerdo con Jordania «implement a greater liberalisation».

nales de carácter bilateral sobre el que se fundamenta el comercio en el sector agrícola constituyendo éste uno de los principales elementos diferenciadores entre los acuerdos actualmente existentes. En este sentido, como es lógico en la negociación con Túnez el aceite de oliva ha ocupado un lugar prioritario mientras que en Jordania ese lugar lo han ocupado determinadas frutas, mientras que en Marruecos los esfuerzos se han centrado en el tomate. La radiografía de los intercambios agrícolas se refleja claramente en los calendarios que establecen el desmantelamiento arancelario y en los protocolos que incluyen una mayor liberalización en el sector agrícola.

Menos complicaciones ofrecen, al menos en principio, el sector industrial y la prestación de servicios. En cuanto al primero de ellos no sólo se impide el establecimiento de nuevos derechos arancelarios o tasas con efecto equivalente, sino que se incluye un completo calendario que pretende su eliminación total de forma progresiva en un período de doce años. Los servicios, por otra parte, y su liberalización, viene marcada por el hecho de formar parte de la Organización Mundial del Comercio, puesto que en este caso los compromisos adquiridos (GATS/AGCS) son idénticos en el Acuerdo de Asociación. En el supuesto contrario, los prestatarios europeos se beneficiarían de la cláusula de nación más favorecida.

El tercer pilar, que constituye un complemento indispensable para que sea posible la progresiva liberalización de los intercambios comerciales, se centra en la supresión de todos los obstáculos que puedan distorsionar las operaciones financieras vinculadas al adecuado funcionamiento del mercado. Con ello, existe un claro compromiso para garantizar la libre circulación de capitales relativa a las inversiones directas en el extranjero y para eliminar toda práctica fiscal discriminatoria que recaiga sobre productos similares originarios de los Estados signatarios. Si bien esta liberalización de la circulación de capitales tiene un carácter instrumental, a través de consultas y negociaciones se establecerán medidas de carácter más absoluto. En este sentido son importante destacar también las disposiciones tendentes al establecimiento de una protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual e industrial —donde los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (TRIPS/ADPIC) y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, también han servido de sustento—, debiendo ser ratificados en un período de cinco a siete años. Por último, y al margen de los esfuerzos que debe realizar el Consejo de Asociación constituido en cada uno de los Acuerdos para su desarrollo y la consecución de los objetivos establecidos, existen un amplio ámbito de trabajo en el ámbito del derecho de la competencia, y en especial de los monopolios estatales, empresas y contratación pública.

Por último, el cuarto pilar está relacionado con los numerosos ámbitos de cooperación que deberán ser reforzados o desarrollados en los plazos establecidos para la ejecución de los acuerdos. Con ello se pretende contribuir a facilitar la adaptación de las estructuras y la capacidad productiva de los países asociados a la emergente competencia que surgirá como consecuencia de la creación de una zona de libre cambio. La modernización industrial, la reestructuración económica, la diversificación productiva, la mejora del marco reglamentario y normativo en los sectores principalmente afectados, la promoción de las inversiones o el apoyo a la administración pública son algunos de los elementos que posibilitarán la transición a las nuevas circunstancias económicas que indudablemente tendrán importantes consecuencias políticas, socia-

les y culturales. De ahí que se preste especial atención a las medidas tendentes a garantizar un paralelo desarrollo social como son la mejora de los sistemas de protección social y de cobertura sanitaria, la reducción de la presión migratoria, o la reinserción de personas repatriadas.

Ambos acuerdos establecen un Consejo y un Comité de Asociación, con poderes decisorios para desarrollar el acuerdo, y se prevé consolidar las relaciones entre el Parlamento Europeo y el Parlamento de cada uno de los Estados signatarios.

Como se citara más arriba, el período transcurrido desde la firma de los acuerdos hasta su ratificación por cada uno de los Estados miembros ha sido en algunos casos excesivamente largo y por ello algunos se encuentran más avanzados que otros en su ejecución. Además hay que tener en cuenta como afectan a algunos de ellos, especialmente a los concluidos con el Estado de Israel y con la Autoridad Palestina¹⁸, el conflicto de oriente próximo.

Si bien es pronto para evaluar los avances que se han producido en el acuerdo con Jordania, en el caso de Túnez los plazos establecidos se han ido cumpliendo en lo relativo al desmantelamiento arancelario en los sectores afectados, así como en la renegociación de las concesiones agrícolas.

V. EL PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN Y LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los criterios establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague de Junio de 1992 para determinar la elegibilidad de los Estados candidatos pueden ser de gran utilidad para analizar las opciones de consolidación del proyecto Euromediterráneo. En Breve, los criterios utilizados en la ampliación al este pueden resumirse como sigue:

- Un criterio de carácter político: la presencia de instituciones estables que garanticen la democracia, la primacía del derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías.
- Otro de carácter económico: la existencia de una economía de mercado viable y capaz de afrontar la competencia y las fuerzas del mercado interior de la Unión Europea.
- Por último es necesario adoptar el «acquis communautaire» asumiendo las obligaciones y subscribiendo los objetivos de la unión política, económica y monetaria.

Considerando los criterios de selección, es importante tener en cuenta la experiencia de Chipre y de Malta; y seguir de cerca los pasos de las negociaciones con Turquía. Cada uno de estos Estados, siendo todos ellos mediterráneos, ofrecen una características claramente diferenciadoras.

18. Estos acuerdos por otra parte, muestran algunas características que los diferencian claramente del resto. Así, a título de ejemplo, el Acuerdo con Israel no incluye las disposiciones sobre las cooperaciones bilaterales y el de la Autoridad Palestina se trata de un acuerdo «*intérimaire*»

Así, en el caso de Chipre, podemos recoger en breve que la Comisión Europea emitió en 1993 su primera opinión sobre la solicitud chipriota de adhesión. Si bien en ella se apreciaba un nivel de desarrollo económico elevado, se criticaban las disparidades políticas y económicas internas. Posteriormente en 1997, en el Consejo Europeo de Luxemburgo de diciembre se define una estrategia de preadhesión¹⁹. No obstante, y a pesar de las divergencias con la comunidad turca persisten, se ha logrado entrar en el paquete aprobado por Bruselas el mes pasado²⁰, habiéndose apreciado los esfuerzos de ambas partes y de Naciones Unidas para la resolución del conflicto turco-chipriota.

La candidatura de Malta de 16 de julio de 1990 obtiene una opinión favorable en 1993. No obstante, en 1996 el nuevo gobierno maltés decidió suspender su candidatura y el proceso de adhesión solo fue reactivado nuevamente en 1998. Todos los informes han puesto de manifiesto que Malta presenta todas las características de una economía de mercado que requeriría tan sólo algunas mejoras para su adaptación a la fuerte competencia²¹, y en marzo del año 2000 se empezó a concretar la estrategia de preadhesión que ha finalizado con éxito.

Atención especial requiere el caso de Turquía²², pues su desarrollo posiblemente suponga la clave del Mediterráneo. Desde hace años, con la firma del Acuerdo de Ankara en 1963, comenzaron las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. Pero fue en abril de 1987 cuando Turquía presenta su solicitud de adhesión. En 1989 recibe de la Comisión una respuesta contraria a la inmediata apertura de las negociaciones. Durante los años noventa, y a pesar de reconocer el buen funcionamiento de la unión aduanera, surgieron dificultades tanto en el mantenimiento del diálogo político como en lo relativo a la cooperación financiera. Igualmente, la situación de los derechos humanos en el país ha constituido un obstáculo de especial importancia. Finalmente, el Consejo Europeo de Luxemburgo confirma en diciembre de 1997 la elegibilidad de Turquía para la adhesión siendo adoptadas a lo largo del año siguiente la estrategia necesaria para su preparación²³. En 1999 fue aceptada como Estado candidato en las mismas condiciones que el resto. No obstante, en el reciente Consejo de Bruselas, y a pesar de reconocer los importantes avances hacia la consecución de los criterios de Copenhague, se pospone hasta la celebración del próximo Consejo de la Presidencia danesa la decisión sobre la próxima fase de la candidatura de Turquía.

Siguiendo los pasos de Turquía, y con la experiencia ya consolidada de la «ampliación», no cabe duda de que los acuerdos euromediterráneos inician, en el marco

19. Centrada fundamentalmente en el fortalecimiento institucional y de la capacidad administrativa en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior; y la participación en determinados programas y agencias comunitarias, entre otros.

20. El Informe Periódico de 2002 (COM(2002)700 final de 9 de octubre de 2002), así lo establece.

21. Se ha señalado en repetidas ocasiones la necesidad de afrontar una modernización industrial a través de las modificaciones pertinentes para poder afrontar la competencia del mercado único.

22. Bastante duro es el Informe Periódico de este año (COM(2002)700 final de 9 de octubre de 2002, en el que a pesar de los esfuerzos realizados por Turquía se enumeran argumentos sobrados para justificar el incumplimiento, especialmente, del criterio político.

23. Centrada esencialmente en la consolidación de la unión aduanera, su extensión a la agricultura y a los servicios, y del fortalecimiento de la cooperación en otros ámbitos.

de Barcelona, todo un proceso de asociación que abre las puertas a una posible incorporación al proyecto comunitario. Considerando los criterios de Copenhague, y avanzándose notablemente en los aspectos económicos y los relativos a la aceptación del «acquis», los aspectos políticos, dotados de una importante dimensión religiosa, serán el centro de los esfuerzos comunitarios para consolidar las instituciones estables que garanticen la democracia, la primacía del derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías.

VI. CONCLUSIONES

Se ha pretendido con estas reflexiones plantear en esta edición del Anuario de Derecho Europeo de la Universidad de Sevilla algunas cuestiones sobre el futuro de las relaciones euromediterráneas a la luz de la reciente confirmación de la ampliación a los Países de Europa Central y Oriental. Indudablemente, el proceso de Barcelona y los acuerdos de asociación que se generan como consecuencia del marco de colaboración existente, no sólo profundizarán en las relaciones existentes sino que permitirá aplicar al Mediterráneo la experiencia europea adquirida en los últimos cincuenta años.